

Auto No. AI-011
Proceso: Verbal
Demandante: Lucelly Cano Rodríguez
Demandados: Fiduciaria Corficolombiana
Radicado: 05001 31 03 011 2020 00298 01.
Decisión: Confirma auto apelado.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, nueve (09) de febrero del dos mil veinticuatro (2024).

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, frente al auto del ocho (08) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), por medio del cual el Juzgado Once Civil del Circuito de Oralidad de Medellín resolvió lo atinente al decreto de pruebas clamadas por el actor, de manera concreta, la negativa en torno al decreto de la prueba testimonial.

I. ANTECEDENTES

1. Mediante providencia previamente referenciada, el Juzgado en cita, prosiguiendo con las etapas inherentes al trámite jurisdiccional, se aprestó al decreto de las pruebas que harían parte del acervo de igual naturaleza dentro del presente proceso, auto en el cual el juzgado de origen negó la prueba testimonial solicitada por la codemandada Fiduciaria Corficolombiana S.A, porque no cumplió con la exigencia prevista en el artículo 212 del C.G.P, dado que no se enunció concretamente el objeto sobre el cual iba a declarar cada uno de los testigos. Defecto que impide al juez declarar la admisibilidad de la prueba en los términos de conducencia, pertinencia y utilidad previstos en el artículo 168 *ibidem*.

2. **Del recurso de apelación.** Contra este proveído, y por ser contrario a sus intereses, el apoderado de la parte demandada formuló recurso de reposición y en subsidio apelación, indicando que, el Código General del Proceso no establece una ritualidad o una forma específica de solicitar o de relatar los hechos para los cuales han sido citados o

solicitados los testigos, por lo que no resulta necesario que se haga un análisis de los hechos sobre los que se va a declarar. Siendo suficiente mencionar que va declarar sobre los hechos para dar por cumplido el requisito previsto en el artículo 212 del C.G.P. Igualmente, mencionó a los testigos que a su criterio resultan importantes para el objeto del litigio por su grado de cercanía con los hechos en que soporta la demanda.

3. Una vez surtido los traslados pertinentes, el Juez resolvió el recurso de reposición reiterando similares argumentos a los que expuso al momento de su negación, advirtiendo que conforme a lo previsto en el artículo 212 del C.G.P, se excluye la alusión de fórmulas genéricas para la petición de la prueba, que no se adecúa a la exigencia de “enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”. Igualmente, precisó que admitir esa petición general implica una vulneración al derecho de contradicción de la contraparte, máxime cuando la actividad judicial se rige por el principio dispositivo en cabeza de las partes, quienes deberán pedir las pruebas atendiendo a su interés en el proceso, lo cual escapa a la filosofía de las pruebas de oficio.

Seguidamente, concedió el recurso de apelación, el que ahora corresponde desatar al Tribunal, con apego en las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

1. **De la prueba testimonial:** Iniciemos precisando que de la lectura del artículo 212 del Código General del Proceso, se desprende inconcusamente la exigencia de unos requisitos formales, taxativos y de obligatorio cumplimiento que deben cumplir las partes al momento de la solicitud de una prueba testimonial, requisitos que van dirigidos a identificar el órgano de la prueba, como los son el nombre, el domicilio, la residencia o el lugar donde pueden ser citados los testigos y, las demás exigencias van encaminadas a establecer la pertinencia, utilidad o conducencia de la prueba testimonial, de ahí que se exija la enunciación concreta de los hechos que son materia de la prueba.

Como viene de explanarse, los primeros requisitos, en sí, se refieren a la persona del declarante sin ninguna calificación adicional; y los segundos, al hecho investigado, al margen del contenido intrínseco del testimonio, teniendo ello en claro, es innegable, entonces, que la norma antes referida detenta pautas claras y precisas que sirven de base a los requisitos mínimos tendientes al decreto efectivo de una prueba testimonial y, evidentemente, uno de ellos está encaminado al hecho de que se identifique plenamente la persona llamada a comparecer como testigo, pues si no se cumple con dichos requisitos, luego, como fatal consecuencia, el medio probatorio será negado.

3. Caso en Concreto: El asunto a resolver por la Sala de Decisión se circunscribe únicamente en determinar si -como lo alega la parte recurrente- el *A quo* debió decretar la prueba testimonial, o, en caso contrario, si le asiste razón al juzgador de primer grado, cuando estimó que las pruebas no fueron pedidas de conformidad con el artículo 212 del C.G.P.

3.1. Descendiendo a esa labor, una vez analizado el argumento que expone la parte demandada en la solicitud de la prueba testimonial (3.5 *CONTESTACION FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA*) la pretensión de su recepción se cae por su propio peso, pues, se evidencia que la solicitud del medio probatorio no es suficiente, en el sentido que si bien categóricamente señaló que citaba a los señores Margarita María Betancourt, Jaime Andrés Toro Aristizábal, José Jaramillo Bonilla, Sebastián Restrepo Arboleda, Santiago Sierra Angulo, Francisco José Sintura, Jorge Andrés Marín, Ana María Palacio Bedoya, Bibiana María Reventoz Castro “para que declare sobre todos y cada uno de los cuarenta y cuatro hechos formulados en el escrito de la demanda y lo que le conste a cada uno de los hechos concernientes a la demanda y su contestación”, lo cierto es que tal y como lo advirtió el Juez Cognoscente no precisó con claridad las razones por las que resultan necesarias sus declaraciones y, por el contrario, su sustento fue de manera general e inconcreto, incumpliendo así con el presupuesto previsto en el

inciso 1 del artículo en cita **“enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”**.

Sobre el tema, podemos traer a colación las palabras del H. Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque en sentencia STC 14026-2022, en la que explica la importancia de enunciar concretamente los supuestos sobre los cuales versará la declaración de la prueba testimonial, como una garantía al derecho de contradicción de la contraparte, veamos:

Tratándose del testimonio aducido o pedido por alguna de los extremos de la litis, y que deba practicarse en audiencia¹, el derecho de contradicción del no solicitante se garantiza brindándole la posibilidad de contrainterrogar al testigo (...)

Ahora, el derecho a contrainterrogar también es limitado. Además de ciertas restricciones relativas a la naturaleza de las preguntas², el contrainterrogatorio no puede versar sobre cualquier hecho de interés de quien lo practica, ni cualquiera asociado a la controversia. Debe circunscribirse, al igual que el interrogatorio directo, que es el realizado por quien reclamó el testimonio, a los enunciados fácticos objeto de la prueba, así como a su contenido. Todo, a fin de que la contraparte pueda obtener su aclaración, refutar el relato, o con fundamento en ella, confirmar su versión sobre los hechos del litigio. (Subrayas propias)

Así se desprende del artículo 212 del C.G.P, en armonía con los preceptos 212 y 220 del mismo estatuto. De acuerdo con el primero ellos, “[c]uando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y **enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba**”. Conforme al segundo, “[e]l juez informará sucintamente al testigo acerca de **los hechos objeto de su declaración** y le ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos”. Y a voces del tercero, “[e]l juez rechazará las **preguntas inconducentes**, las manifiestamente **impertinentes** y las **superfluas** por ser repetición de una ya respondida, a menos que sean **útiles** para precisar la razón del conocimiento del testigo sobre el hecho”.

(...)

Las razones que justifican los límites del contrainterrogatorio del testimonio.

Ahora, que así sea se justifica en la naturaleza confirmatoria del actual juicio civil, en virtud de la cual las partes acuden al proceso para corroborar, mediante las pruebas que aportan y solicitan, sus versiones sobre el conflicto planteado a la jurisdicción. No encargan al juez, como antes, la consecución de las probanzas requeridas con el fin de demostrar sus posturas.

¹ De conformidad con lo previsto en el artículo 222 del C.G.P debe diferenciarse entre los testimonios recibidos fuera del proceso, sin intervención de la persona contra quien se aduzcan, y los que se practican en el juicio. Los primeros deben ratificarse, siempre y cuando el no solicitante así lo pida. De no pedirse, frente a ellos se entenderá surtida la contradicción. Los segundos, deberán en la respectiva audiencia.

² El artículo 220 del C.G.P. prescribe que son inadmisibles “las preguntas no pueden provocar conceptos del declarante que no sean necesarios para precisar o aclarar sus percepciones, excepto cuando se trate de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos, científicos o artísticos sobre la materia”, las sugestivas y las insinuentes.

Memórese que en vigencia del Código de Procedimiento Civil, el juzgador era quien obtenía, mediante oficios librados por la secretaría del despacho, los documentos que las partes querían hacer valer, o si se trataba de practicar un dictamen, era él quien designaba un auxiliar de la justicia. A diferencia de lo que ocurre con el Código General del Proceso, pues, por el contrario, es deber de las partes “abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubiere podido conseguir”, así como aportar las experticias de su interés.

La prueba testimonial no fue ajena a esa variación. El artículo 219 del Código de Procedimiento Civil establecía que “[c]uando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio y residencia de los testigos, y enunciarse sucintamente³ el objeto de la prueba”. Y el numeral 4º del precepto 228 enseñaba, en cuanto a su práctica, que luego del juez, “las partes podrán interrogar al testigo, comenzando por quien solicitó la prueba”. De modo que el testigo era llevado a rendir su declaración sin saber, específicamente, sobre qué hechos iba a versar su relato. Y en la respectiva audiencia podía ser increpado por el juez y las partes por cualquier tema relativo al pleito. Desde esa perspectiva, tratadistas, como Devis Echandía, sostenían que, en atención al principio de comunidad de la prueba, “una vez citado un testigo, la parte contraria a quien lo presentó, puede utilizarlo para que exponga sus conocimientos sobre otros hechos relacionados con el proceso o sobre circunstancias diversas de los mismos que son materia del interrogatorio inicial”⁴.

Pero ahora, atendiendo a que las partes acuden al proceso a confirmar sus versiones del conflicto, si pretenden aducir como prueba un testimonio, deben enunciar “concretamente los hechos objeto de la prueba”, es decir, indicar de manera precisa, determinada y sin vaguedad los puntos fácticos del litigio sobre los cuales tiene conocimiento y podrá ser interrogado. De esa manera se facilita la práctica del testimonio y su contradicción. El juez y las partes sabrán de antemano cuál será el tema de la declaración. Por su lado, quien no la pidió, al conocer con claridad su objeto, podrá preparar adecuadamente su contrainterrogatorio, a fin de desacreditar al testigo o su relato. (Subrayas propias)

Se entiende, entonces, por qué el contrainterrogatorio del testimonio no puede versar sobre cualquier enunciado fáctico, sino, respecto de aquellas circunstancias que lo motivaron. Y, asimismo, las razones por las cuales el juez puede rechazar por impertinentes, inconducentes e inútiles, las preguntas materia del contrainterrogatorio.

Asimismo, debe enfatizarse que, a pesar de los esfuerzos argumentativos del recurrente en señalar que la solicitud de pruebas atiende a la pertinencia, utilidad y conducencia, porque el conocimiento directo de los testigos sobre los hechos objeto de litigio vislumbra su importancia en el proceso, lo cierto es que dicho reclamo no guarda una relación directa con la petición y ello es así, por cuanto, ni en sede de apelación precisó concretamente los móviles por los cuales resulta necesario su decreto, incumpliendo así con la exigencia prevista en el artículo 212 del C.G.P, la cual no admite una interpretación distinta, en la medida que no se trata de

³ De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, “sucintamente” se refiere a la brevedad.

⁴ Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II. Editorial ABC. Bogotá. 1973.

una exigencia meramente formalista, sino que, como se advirtió preliminarmente, constituye una garantía al derecho de contradicción de la contraparte, y en tal sentido, resulta necesario que al momento de su petición se concreten suscintamente los hechos en los que versará su declaración. Circunstancia por la que no queda otro camino diferente a confirmar la decisión por las razones que indicó el Juez en primera instancia y que acompaña el Tribunal.

De esta manera y por las razones expuestas, el ***Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Medellín***, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto que por vía de apelación se revisa proferido el día ocho (08) de noviembre del dos mil veintitrés (2023) por el Juzgado Once Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, ello, de conformidad con las razones expuestas de manera precedente.

SEGUNDO: Sin lugar a condena en costas.

NOTIFÍQUESE

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
MAGISTRADO

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fb7b0785c9b0678703d2490d6f8b8a1bb7eef96675c147c127ff8f801336dd6c**

Documento generado en 09/02/2024 09:25:06 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>